

Capítulo 2

Mobilización social violenta: un modelo para su análisis desde la política contenciosa*

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287818385.02>

Vicente Torrijos

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Juan Sebastián Granada-Cardona

EUniversidad Nacional Autónoma de México

Resumen: El análisis de los fenómenos políticos actuales mediante los mecanismos de la política contenciosa brinda una valiosa oportunidad para comprender las dinámicas contemporáneas, explorando los vínculos entre la contienda y la democracia. Este artículo presenta un marco analítico de alcance intermedio, fundamentado en las características más relevantes de la movilización social violenta, entendida como una manifestación específica de la política contenciosa. A partir del estudio de casos recientes en países como Estados Unidos, Chile y Colombia, se valida la aplicabilidad del modelo propuesto. Asimismo, los diagramas incluidos permiten identificar la relación entre la noción de movilización social violenta y su implementación práctica en distintos contextos.

Palabras clave: Conflicto, democracia, movilización social, política contenciosa, protesta social, violencia.

* Este capítulo es resultado del proyecto de investigación *Cultura de paz y su relación con la seguridad en el hemisferio occidental*, desarrollado por el grupo Masa Crítica de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", clasificado en la categoría A1 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), y registrado con el código COL0123247. Los puntos de vista y los resultados presentados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición de las instituciones participantes.

Vicente Torrijos

Magíster en Estudios Políticos, cursó los estudios doctorales en Relaciones Internacionales, culminó la estancia postdoctoral en Asuntos Estratégicos, Seguridad y Defensa, es postgraduado en Altos Estudios Internacionales y periodista con especialidad en Opinión Pública. Profesor titular, Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Colombia. Profesor emérito de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, distinguido con el Premio a la Excelencia Académica. <https://orcid.org/0000-0003-3837-6196>

Contacto: vicente.torrijos@esdeg.edu.co

Juan Sebastián Granada-Cardona

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Antropología Social e Histórica, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), Francia. Politólogo, Universidad del Rosario, Colombia. <https://orcid.org/0000-0002-3601-192X>

Contacto: granadacardona@comunidad.unam.mx

Citación APA: Torrijos, V. y Granada-Cardona, J. S. (2025). Movilización social violenta: un modelo para su análisis desde la política contenciosa. En A. Cerón Rincón y V. Torrijos. (Eds.). *Cultura de paz: reflexiones desde la noción de seguridad* (pp. 29-52). Sello Editorial ESDEG. <https://doi.org/10.25062/9786287818385.02>

CULTURA DE PAZ: REFLEXIONES DESDE LA NOCIÓN DE SEGURIDAD

ISBN impreso: 978-628-7818-37-8

ISBN digital: 978-628-7818-38-5

DOI: <https://doi.org/10.25062/9786287818385>

Colección Derechos Humanos y DICA

Sello Editorial ESDEG

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Bogotá D.C., Colombia

2025



Introducción

Como han demostrado empíricamente Della (2015) y Walter (2022), en las últimas décadas, el debilitamiento de la protección social y la crisis de capacidad de respuesta del Estado han contribuido al aumento de la desigualdad y la precariedad. Esta situación no solo ha intensificado la fragmentación social en términos identitarios —pues es difícil construir un discurso de nación cuando la experiencia vital de la realidad es profundamente desigual entre los ciudadanos—, sino que también ha impulsado movilizaciones más particularistas y locales, aunque con reivindicaciones compartidas, en distintos lugares del mundo.

Adicionalmente, es importante resaltar que, durante la pandemia de COVID-19, se radicalizaron algunos movimientos de protesta con brotes significativos de violencia. En los últimos años, se han registrado movilizaciones sociales violentas en países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití (Armed Conflict Location y Event Data Project [ACLED], 2020b).

Si bien cada una de estas experiencias tienen sus singularidades —como la extrema desigualdad en Brasil y Haití, la persistencia de grupos armados ilegales en Colombia, o la fractura institucional en Nicaragua y Venezuela—, también es posible identificar, más allá estas particularidades, ciertos rasgos comunes que permiten desarrollar análisis de alcance medio. Esto implica superar el enfoque centrado exclusivamente en la especificidades de cada caso, sin necesidad de recurrir a marcos explicativos de tipo sistémico o estructural.

En este sentido, es pertinente analizar la movilización social violenta a través de los mecanismos de la contienda política, prestando especial atención a las estrategias organizativas, los factores que promueven o inhiben el recurso a la violencia, así como en sus efectos a nivel grupal. Esta perspectiva ofrece una valiosa

oportunidad para comprender las dinámicas más recientes de la política mundial, ya que reconoce el papel de la contienda en los fenómenos políticos y, consecuentemente, facilita la exploración de los vínculos entre la contienda y la democracia.

Este artículo propone un marco analítico para abordar los casos de movilización social violenta, entendida como una manifestación específica de la política contenciosa. Además, se presentan algunas consideraciones sobre la importancia de esta perspectiva para interpretar, de manera más efectiva, los desafíos que plantean las experiencias de violencia en las movilizaciones contemporáneas.

Como toda propuesta analítica, este marco opera con objetivos específicos y no está exento de limitaciones. Su alcance es deliberadamente intermedio, ya que se centra en analizar las posibilidades estratégicas que se despliegan en el marco de la contienda política violenta. En este sentido, los factores que promueven e inhiben el recurso a la violencia adquieren una relevancia particular.

La utilidad de este marco analítico no reside, por tanto, en su capacidad para explicar las condiciones estructurales que preceden o precipitan la violencia ni en la de sintetizar sus consecuencias sociopolíticas, pues tales aspectos escapan a su propósito. Asimismo, al tratarse de un análisis de nivel intermedio, tampoco pretende explicar detalladamente las condiciones que llevan a los individuos a integrarse en distintas dinámicas violentas.

Para comprender estos fenómenos con mayor rigor, en una primera parte del artículo, se presentan las características sobresalientes de las movilizaciones sociales violentas contemporáneas. Esto se hace a partir de los hallazgos empíricos de trabajos recientes (ACLED, 2020a; 2020b; 2021; Della, 2015; Walter, 2022). Este análisis permite identificar el contexto particular, tanto institucional como ideológico, en el que se desarrolla la violencia. En el segundo apartado se plantea una discusión analítica de los resultados, lo que permite comprender el ejercicio de la violencia en el marco de las movilizaciones sociales como uno factor desestabilizador del orden político establecido.

Con base en este análisis, la tercera parte propone un modelo —orientado a la investigación en estudios políticos e internacionales— fundamentado en el marco de la política contenciosa (Tilly, 2017). Este modelo se centran en los siguientes aspectos:

- La situación o trasfondo político;
- el papel de los actores;
- las opciones o caminos de acción.

Esta propuesta busca contribuir a la comprensión de la densidad y la complejidad de la movilización social violenta, sin desconocer su carácter fundamentalmente ambiguo (Tilly, 2022b).

El artículo se desarrolla siguiendo un método inductivo. Inicia con el análisis del material empírico, que da pie a una discusión analítica, y culmina con una síntesis estructurada en forma de esquema. Como herramienta de análisis político, esta propuesta facilita la identificación y el aislamiento de tres aspectos cruciales en cualquier movilización social violenta: i) los detalles más relevantes del proceso; ii) los momentos considerados detonantes de la acción; y iii) los vínculos entre actores e instituciones.

Este modelo constituye un aporte significativo, tanto a nivel metodológico como teórico-conceptual, para aquellos interesados en desentrañar la configuración de un fenómeno político tan complejo como las movilizaciones sociales violentas.

Marco teórico y metodología

Más allá de la relevancia de las teorías normativas, que promueven la resolución de conflictos mediante el consenso, la cohesión social y los mecanismos legales (civiles y penales), es fundamental considerar perspectivas menos normativas. Estas, a diferencia de las anteriores, otorgan al conflicto un valor político innegable. Un claro ejemplo de esto es la teoría conflictivista.

La perspectiva conflictivista ofrece ventajas destacadas:

- Una visión amplia de la naturaleza de las interacciones violentas, que abarca desde lo individual hasta lo colectivo;
- la consideración de todas las formas de violencia, desde las acciones abiertamente voluntarias hasta aquellas que son más sutiles o menos intencionales;
- el reconocimiento de una multiplicidad de actores violentos, que se despliegan a lo largo de un continuo que va desde la insurgencia hasta la institucionalidad (Giner, 2001).

En consecuencia, esta perspectiva también contempla los mecanismos de seguridad, policiales y militares, los cuales pueden recurrir a la represión como medio para garantizar el orden.

Es fundamental reflexionar sobre la movilización social violenta en un contexto político, sin ignorar el valor práctico que puede tener, tanto para los actores

estatales como para quienes lo desafían. Con base en los estudios de Charles Tilly (2010; 2017; 2022b) y Auyero (2007) sobre movilización social, la relación entre esta y la violencia se comprende por cómo sus significados se configuran en el tiempo y en el espacio. De ahí que, para entenderla, sea indispensable analizarla siempre en su contexto.

Así, en primer lugar, la movilización social violenta se entiende como una forma de interacción social en la que diversos actores sociales —tanto individuales como colectivos— participan en actividades que pueden ser planificadas o espontáneas, y en las que se produce un daño intencionado (Giner, 2001; Tilly, 2022b).

En segundo lugar, es importante destacar que las acciones emprendidas durante una movilización —como la negociación, la modificación de estrategias, las elecciones, las alteraciones y la improvisación— están, por un lado, condicionadas por las normas, los valores y los guiones de quienes participan. Por otro lado, son decisivas en la transformación tanto de la confrontación como de las representaciones de los actores en pugna. En este sentido, es crucial reconocer que estas representaciones no son estáticas; más bien, se modifican como resultado de la coordinación entre actores y de las respuestas que surgen en el curso de su interacción (Tilly, 2022a).

Con el fin de comprender mejor el papel de las instituciones, el contexto económico y las relaciones sociales en el desencadenamiento y la intensidad de las movilizaciones sociales violentas más recientes, esta investigación se apoyó en un análisis comparativo de distintos contextos. A partir del estudio de casos con evidencia empírica, fue posible identificar los recursos individuales asociados a la protesta política, el rol de las instituciones y organizaciones, así como la percepción de insatisfacción ciudadana (Quaranta, 2015; Vráblíková, 2014).

Cabe destacar que la revisión de casos empíricamente disímiles —en cuanto a sus motivaciones y escenarios— muestra que las condiciones particulares de cada uno (es decir, las diversas situaciones de desintegración o desequilibrio de cada sistema político) no son decisivas para el marco analítico propuesto. Esto se debe a que el objetivo no es abordar los aspectos estructurales o sistémicos de las interacciones violentas.

Para la búsqueda y selección de la información, primero se elaboró un estado del arte sobre estudios paradigmáticos de la movilización social contemporánea (Álvarez et al., 2011; Hessel, 2010; Roitman, 2012; Antentas y Vivas, 2009; Jacson, 2012; Montgomery, 2011; Blumenkranz et al., 2011). En segundo lugar, se realizó una investigación documental enfocada en hallazgos empíricos recientes, utilizando informes y bases de datos del Armed Conflict Location and Event Data

(ACLED). Estos proporcionan información actualizada sobre ubicaciones, fechas, actores y características de eventos de protesta y violencia política a nivel global. La investigación se centró en las movilizaciones ocurridas entre 2019 y 2021 en Estados Unidos —especialmente los movimientos *Black Lives Matter* (BLM), *Proud Boys*, *QAnon* y *Boogaloo*—, así como en las protestas ciudadanas desarrolladas en Chile, Colombia y Bolivia durante el mismo periodo.

El propósito de esta investigación es proponer un marco analítico e interpretativo que permita identificar las conexiones entre la movilización social violenta y sus manifestaciones empíricas. Por esta razón, el estado del arte se limita a exponer los argumentos centrales del debate, evitando una revisión exhaustiva del fenómeno de la movilización social contemporánea, ya que esto excede los propósitos y el alcance de este capítulo.

Resultados: casos de movilización social violenta

Para definir la movilización social violenta, se parte del trabajo de Touraine (2006), quien subraya el carácter conflictivo inherente a toda movilización social. Según Touraine, esta es una forma de acción que exige participación colectiva organizada y la existencia de objetivos comunes que se confrontan con los de otros actores sociales.

Ahora bien, como “las formas, [actores] y reivindicaciones de los movimientos sociales varían y están sujetas a un proceso de evolución histórica” (Tilly, 2010, p. 294), es necesario considerar la internacionalización —tanto de prácticas como de discursos—, los desafíos contemporáneos de la democracia y las características cambiantes de los actores, como su creciente profesionalización. Movimientos como Los indignados (Álvarez et al., 2011; Hessel, 2010; Roitman, 2012), la Resistencia Global (Antentas y Vivas, 2009), Occupy World Street (Jackson, 2012; Montgomery, 2011; Blumenkranz et al., 2011) y el 15-M, entre otros, son paradigmáticos de este nuevo contexto, cuyos rasgos distintivos pueden considerarse un eslabón clave hacia las movilizaciones más recientes.

Con el fin de acotar el alcance de este estudio, el análisis se centró en aquellas acciones colectivas en las cuales los participantes, para alcanzar sus objetivos, actúan deliberadamente contra otras personas, ya sea amenazándolas, atentando contra ellas o infligiéndoles daño físico (Jackman, 2002).

BLM, iniciado en 2013, se destaca como uno de los movimientos sociales más influyentes de los últimos años. Su impacto fue inesperado, no solo por su magnitud, sino también por abordar temas que trascendieron las fronteras de la sociedad estadounidense, siendo replicado con éxito en otras naciones. En el marco de este análisis, su importancia radica en que sus movilizaciones fueron

desencadenadas por actos de violencia que, a su vez, precipitaron reacciones violentas en diversas urbes de los Estados Unidos, como Seattle o Portland (ACLED, 2020a; Shepherd y Bailey, 2020).

En la última fase de este movimiento, que comenzó en 2020, se intensificó la tensión entre los grupos locales movilizados —organizados en red— y los agentes institucionales del gobierno de Donald Trump. Las movilizaciones de ese periodo no solo pusieron de manifiesto la incapacidad y la falta de voluntad del gobierno para atender las demandas sociales y las subsiguientes oleadas de protesta, sino que también evidenciaron el fortalecimiento de diversas redes de movimientos que clamaban justicia por un hecho concreto: el asesinato de George Floyd, un hombre desarmado, a manos del oficial de policía Derek Chauvin. Floyd fue asfixiado por Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos, ignorando sus reiteradas súplicas de auxilio (Encyclopaedia Britannica, 2022). La falta de una respuesta empática por parte de las distintas agencias gubernamentales también contribuyó a la escalada de las movilizaciones.

Por otra parte, el caso de BLM saca a la luz una profunda división en la sociedad estadounidense contemporánea. La violencia institucionalizada, ejemplificada por la brutalidad policial hacia la población afrodescendiente vulnerable, no es percibida como un problema público que demanda una respuesta de las instituciones políticas ni tampoco genera un sentimiento de solidaridad en otros grupos marginados, como es el caso de la población blanca denominada *white trash*.

De igual modo, esta violencia, cada vez más radicalizada, encuentra sus fundamentos, por un lado, en un marco legal que se muestra insensible ante las implicaciones de un individualismo que propicia espacios blindados para la violencia, y cuyos costos sociales tiende a ser invisibilizados. Por otro, reside en la particularidad con que se experimenta el multiculturalismo racializado en la sociedad estadounidense. Los ejemplos más trágicos de esta dinámica se observan en los enfrentamientos —y en su cobertura mediática— entre ciudadanos afroamericanos desarmados y policías blancos armados.

Otro caso significativo son las protestas en Chile, iniciadas en octubre de 2019, igualmente relevantes para entender el recurso a la violencia en las movilizaciones sociales recientes (Palacios-Valladares, 2020). La confrontación violenta entre la ciudadanía movilizada —proveniente de diversos contextos socioeconómicos— y las fuerzas policiales de Carabineros ha sido interpretada como una manifestación del desbordamiento de las desigualdades estructurales, especialmente en el acceso a la salud, la educación, al sistema pensional, entre otros, en el marco de un sistema neoliberal (Molina, 2019). Asimismo, estas movilizaciones han sido

comprendidas como una crítica al legado de la dictadura de Pinochet, cuyas secuelas siguen presentes en Chile, como lo demuestra, por ejemplo, la Constitución redactada durante dicho periodo.

El caso colombiano también es ilustrativo. Ante un Estado cuya legitimidad fue cuestionada desde sus inicios —debido a su postura frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016— y con un respaldo limitado de sus aliados políticos, distintos actores civiles confluyeron en una movilización masiva, con el fin de oponerse a las reformas propuestas por el gobierno en 2019. Las manifestaciones violentas ocurridas durante los paros nacionales de 2019-2021 —detonadas, en un inicio, por el rechazo a una propuesta de reforma tributaria— fueron particularmente complejas, pues involucraron tanto a agentes estatales como a actores civiles organizados. Entre los grupos más visibles, destacaron las poblaciones indígenas rurales y los estudiantes urbanos, especialmente en Cali, quienes se enfrentaron, de forma recurrente, a las fuerzas del orden.

Uno de los episodios más violentos se registró en el suroccidente del país, donde se produjo un enfrentamiento entre miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), grupos de civiles armados y fuerzas policiales. Este evento puso de relieve la compleja superposición entre la violencia paraestatal, el vandalismo y la violencia organizada en el marco de la protesta social (Garzón y Sánchez, 2021). A esto se sumó la precaria relación entre el gobierno y los líderes de los movimientos sociales, marcada por la negativa mutua a reconocer la legitimidad de las posturas contrarias. Esto derivó en una radicalización de las protestas y en una intensificación de la represión, acentuada por una creciente militarización del conflicto.

Otro caso importante fue la movilización violenta asociada a la ruptura institucional en Bolivia, desencadenada a partir de 2016, cuando el presidente Evo Morales decidió ignorar los resultados de un referendo y postularse nuevamente a las elecciones presidenciales. A raíz de esto, el proceso electoral comenzó a perder legitimidad, y en 2019, las manifestaciones sociales se extendieron por el país, volviéndose cada vez más violentas (Miranda, 2019). La renuncia del entonces presidente, el interregno de Jeanine Áñez —periodo durante el cual las elecciones fueron pospuestas en varias ocasiones— y su eventual regreso al panorama político pusieron en entredicho la estabilidad democrática del país. Este ambiente, a su vez, dio lugar a nuevas manifestaciones violentas, algunas de ellas dirigidas contra figuras políticas de alto perfil, incluido el propio presidente.

Otro ejemplo representativo de movimientos sociales violentos recientes se ha registrado en Estados Unidos, impulsado por la actividad de grupos como los *Proud Boys*, *QAnon* y el movimiento *Boogaloo*, entre otros. Estas agrupaciones

de extrema derecha —algunas surgidas como reacción al movimiento BLM— han protagonizado enfrentamientos violentos con sus opositores (Biscontin, 2021). Si bien sus miembros ya venían conformando redes y participando en actos violentos en distintas ciudades del país —como en Charlottesville—, su visibilidad se incrementó notablemente en enero de 2021. Fue entonces cuando encabezaron episodios violentos en respuesta a los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en las que Trump no consiguió la reelección (Weiner, 2021). Tras estos eventos, su discurso se radicalizó aún más, incorporando argumentos pseudorreligiosos vinculados a teorías conspirativas. Según sus simpatizantes, las elecciones que resultaron en la victoria del presidente Joe Biden carecieron de legitimidad y fueron calificadas como fraudulentas.

Las críticas a las instituciones no solo se han manifestado en el discurso, sino que también han impulsado llamados explícitos a la acción coordinada contra personas, grupos e instituciones, ampliamente difundidos a través de las redes sociales. El punto culminante fue el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando civiles armados, vinculados a los movimientos previamente mencionados, irrumpieron en el edificio con el claro objetivo de frustrar la toma de posesión del nuevo presidente. Este evento tuvo consecuencias trágicas, como la muerte de cinco personas (Duignan, 2022).

Cabe destacar que estos movimientos contaron con el respaldo de ciertos sectores de la clase política, incluidos algunos senadores republicanos de posturas extremistas (como Taylor Green). Para comprender mejor estas manifestaciones violentas, es importante considerar la posición ambigua que adoptó Donald Trump durante su mandato. Su negativa a condenar muchos de los actos que precedieron el asalto al Capitolio fue interpretada por muchos como una forma de solidaridad o apoyo tácito hacia estos grupos. Por otra parte, la magnitud de la violencia fue tal que obligó a las redes sociales a imponer límites al discurso de incitación, un discurso que, en el primer trimestre de 2021, facilitó la coordinación de acciones en distintas ciudades del país.

Es importante destacar que la radicalización de varios movimientos de protesta ha tenido lugar en el contexto de la pandemia. Las medidas de confinamiento decretadas por distintos gobiernos, la sobrecarga laboral del personal de salud y las pérdidas económicas experimentadas por amplios sectores de la población mundial han actuado como factores desencadenantes de movilizaciones sociales en diversas regiones del mundo. En particular, los disturbios con expresiones violentas se intensificaron entre 2019 y 2021 (ACLED, 2021). De acuerdo con los datos recopilados por ACLED (2021), la pandemia alteró drásticamente el patrón

de violencia de los disturbios sociales. Antes de la irrupción de la crisis sanitaria, predominaban los enfrentamientos entre actores civiles; sin embargo, a partir de ese momento, las fuerzas del Estado pasaron a ser el blanco principal de las acciones violentas en aproximadamente el 75 % de los casos.

Discusión analítica

Además de las motivaciones individuales, los factores tradicionalmente considerados para explicar la participación en protestas incluyen la socialización de los participantes, su condición socioeconómica, el contexto político y la participación de individuos no necesariamente afines con un ideario específico (Orum, 1974; Andrain y Apter, 1995). Estos factores son un punto de partida crucial para analizar las movilizaciones recientes y, desde ahí, identificar los nuevos rasgos que caracterizan a la movilización social violenta.

En el marco de las movilizaciones sociales, las manifestaciones violentas han tendido a dirigir sus acciones contra el Estado, que se ha convertido en su blanco principal. Esta violencia constituye una forma de crítica radicalizada, reflejo de una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas, que son percibidas de la siguiente manera:

- Antidemocráticas;
- opuestas al interés ciudadano;
- indiferentes a las demandas de la sociedad civil;
- obsoletas;
- cómplices de conspiraciones internacionales.

Según Kostelka y Rovny (2019), esta visión del Estado, concebido como una entidad contra la cual se articula la protesta, demuestra que los movimientos sociales violentos no se identifican necesariamente con la política de izquierda.

En cuanto a las justificaciones basadas en teorías conspirativas, el sentimiento de amenaza se erige como el principal detonante de las convocatorias a movilizaciones sociales que derivan en actos violentos. Si bien la amenaza percibida suele vincularse a instituciones internas, en los casos motivados por estas teorías también se identifica un actor externo, cuya influencia es indirecta y difusa.

Otro aspecto relevante de las recientes movilizaciones violentas es el contexto de tensión política en el que han tenido lugar. En algunos casos, los episodios de violencia ocurrieron antes o después de las elecciones nacionales; en otros, surgieron como reacción a anuncios políticos impopulares o reformas controvertidas. Estudios

empíricos, como el de Giugni y Grasso (2019), subrayan la importancia de analizar los vínculos entre estos momentos de crisis y la configuración de redes de participantes durante las movilizaciones. En este sentido, la participación electoral no es incompatible con la movilización social, incluso cuando esta adopta formas violentas.

Para comprender y caracterizar adecuadamente estos episodios de violencia, el factor temporal es determinante en, al menos, dos sentidos. En primer lugar, es fundamental analizar la interacción entre las dinámicas temporales de la agenda política de cada país y el desarrollo de las movilizaciones sociales. En segundo lugar, es necesario considerar la cronología de los acontecimientos, ya que esta permite identificar la evolución, las rupturas y las transformaciones de los procesos en cuestión.

Aunque la mayoría de las movilizaciones sociales analizadas tuvieron un alcance nacional, no se manifestaron de forma homogénea. La pandemia, en particular, transformó el uso del espacio público y puso en evidencia las interacciones entre el espacio público tradicional, los espacios privados y las plataformas virtuales —cada uno con alcances y dinámicas distintas—, que comenzaron a operar como escenarios políticos interrelacionados (Leitner et al., 2008). Así, las manifestaciones no solo tuvieron lugar en las calles de las principales ciudades, sino que también se extendieron a lugares privados —como edificios residenciales— y se replicaron a través de acciones virtuales en redes sociales. Esta expansión multisituada de las manifestaciones permitió consolidar redes más densas entre los manifestantes y articular una mayor diversidad de perfiles sociales.

Por otro lado, este contexto tan singular puso de manifiesto una inusitada capacidad de adaptación por parte de las manifestaciones sociales, algo inusual en escenarios previos. Por ejemplo, las convocatorias a la protesta adquirieron una dinámica de alta inmediatez, permitiendo a los manifestantes reaccionar en tiempo real tanto a los intentos de apaciguamiento o cooptación de actores políticos como a las estrategias represivas de la fuerza pública.

De igual manera, en el contexto contemporáneo, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la configuración del acontecer político y han ejercido una influencia significativa en el desarrollo de las movilizaciones sociales violentas (Lance y Segerberg, 2013). En primer lugar, estos medios —especialmente las plataformas digitales como Twitter o Facebook— han sido esenciales para la organización y difusión de convocatorias, facilitando la formación de redes (Bailo y Vromen, 2017). En segundo lugar, los medios de mayor alcance —capaces de llegar a audiencias nacionales— han contribuido activamente a la construcción de las narrativas en torno a las protestas, moldeando la percepción pública sobre su

evolución, los actores involucrados y los problemas en disputa (Herkenrath y Knol, 2011; Lee, 2014). Finalmente, los medios no solo han funcionado como plataformas de visibilización, sino que también se han convertido en actores estratégicos tanto en la contención de la violencia como en su amplificación al reproducir discursos polarizantes o incitar a la confrontación.

En movilizaciones recientes —como las protestas en Colombia o el auge del movimiento supremacista en Estados Unidos— se observa una articulación multiescalar de las acciones colectivas, estructurada a través de redes locales, regionales y nacionales. Si bien este tipo de configuración no es del todo novedosa, en estos contextos, su particularidad radica en la superposición e interconexión de dichas escalas (Giugni y Grasso, 2019). Las redes locales no solo lograron establecer vínculos con redes regionales que compartían demandas similares, sino que también se conectaron con redes de alcance nacional, a menudo, mediante el uso estratégico de plataformas digitales. Esta articulación permitió amplificar la visibilidad de las acciones ejecutadas en territorios periféricos, históricamente marginados del centro político y mediático.

Estas movilizaciones también han propiciado la emergencia de nuevos actores con diversas afiliaciones sociales (Leitner et al., 2008). Por un lado, se observa la incorporación de participantes antes marginados a la esfera política —como ocurre con las nuevas generaciones en países como Chile o Colombia—, que ahora participan activamente en procesos de deliberación y protesta. Por otro lado, han surgido actores con trayectorias no tradicionales y discursos radicales —como los *Proud Boys*, *QAnon* o el movimiento *Boogaloo*—, cuyas acciones se caracterizan por el rechazo explícito al diálogo como mecanismo de resolución de conflictos y por una retórica confrontacional que desestabiliza los marcos institucionales establecidos.

La pluralidad es un rasgo distintivo de las movilizaciones sociales contemporáneas, incluidas aquellas que recurren a la violencia. En un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones estatales y potenciado por la capacidad de conexión y difusión que ofrecen las redes sociales, se ha facilitado la articulación de demandas compartidas, aun cuando emergen de realidades adversas. En ocasiones, la violencia no responde a una identidad colectiva unificada ni a una posición social homogénea. En cambio, canaliza un conjunto heterogéneo de reivindicaciones vinculadas a cuestiones de género, inequidades raciales o de clase, así como a problemáticas estructurales asociadas a la exclusión y la desigualdad socioeconómica en cada país (Leitner et al., 2008).

En lo que respecta al equilibrio de poder entre los actores movilizados y las autoridades políticas, se ha observado que la posición institucional del Estado era

frágil o atravesaba un proceso de debilitamiento. Ante la percepción de amenaza, los tomadores de decisiones se vieron obligados a operar con un margen de acción considerablemente reducido. En algunos casos, esta presión los empujó a adoptar estrategias confrontativas que, si bien buscaban reestablecer el orden, tenían elevados costos sociales y políticos en caso de fracasar (Goldstone y Tilly, 2001). El caso chileno ilustra cómo, en medio de la escalada del conflicto, las expresiones de violencia no solo lograron desbordar los mecanismos institucionales de contención, sino que también habilitaron la aparición de nuevas demandas sociales que colocaron al gobierno de Sebastián Piñera en una situación de crisis y repliegue.

Cabe destacar que los episodios de movilización social violenta no siempre se dirigen contra el gobierno. La relación entre los movimientos y los tomadores de decisiones puede oscilar entre la confrontación directa y ciertos grados de cercanía o afinidad. En este sentido, para comprender mejor la dinámica de estas movilizaciones, es necesario reconocer que, más allá de expresar un hartazgo generalizado, los actos violentos suelen apuntar a instituciones específicas. Ya sean entidades políticas —como los organismos electorales en Bolivia— o infraestructuras sociales —como el sistema de transporte público en Chile—, estas instituciones tienden a convertirse en blancos visibles y menos controversiales, posicionándose así como catalizadores estratégicos de la acción violenta.

Para terminar de entender este panorama, es importante destacar que el papel de la fuerza pública varía significativamente según el contexto en el que se desarrollan las manifestaciones violentas. Rahtz (2016) señala que, en Estados Unidos, por ejemplo, las tensiones históricas entre las fuerzas policiales y las comunidades afroamericanas son el epicentro de una profunda fisura social, cuya especificidad dificulta cualquier comparación directa con otras realidades sociales. Además, el accionar de las fuerzas policiales no es homogéneo en todos los espacios sociogeográficos. Esta disparidad es un factor determinante tanto en la configuración de las dinámicas de protesta como en el grado de violencia que estas pueden alcanzar.

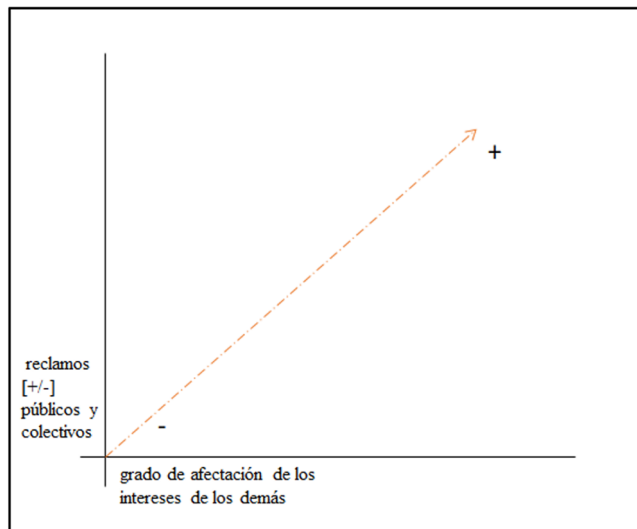
Un modelo para interpretar y analizar la política contenciosa

En esta sección se propone un diagrama basado en tres ejes interrelacionados: i) el contexto o el trasfondo político; ii) el papel de los actores involucrados; y iii) las opciones o cursos de acción disponibles. A partir de estos ejes, se introducen una serie de gráficos que sintetizan información clave para comprender su interacción, facilitando así una lectura integral y analítica de los procesos de movilización social violenta.

El modelo se enmarca en una perspectiva que concibe las movilizaciones como fenómenos contenciosos, es decir, “mecanismos y procesos que operan a través de múltiples niveles [y que posibilitan] [...] dispositivos explicativos o herramientas para elaborar relaciones hipotéticas”¹ (Lichbach, 2010, p. 545).

Existen, por supuesto, la política contenciosa no violenta y la violenta. Aunque ambas se superponen en la práctica e interactúan en distintos niveles, este análisis se concentra en los mecanismos, actores y efectos vinculados a la dimensión violenta de la movilización social. Es importante destacar que, incluso en su expresión más violenta, estas movilizaciones siguen siendo formas de contienda política —en el sentido propuesto por Tilly (2017)—, ya que los participantes entran en conflicto con los intereses de actores institucionales o sociales. Además, este tipo de contienda conserva su carácter político en tanto que los reclamos, ya sean emitidos por los gobiernos, los individuos y las organizaciones involucradas, se realizan de manera pública y colectiva. En este sentido, el grado de violencia tiende a intensificarse en función del nivel de afectación a los intereses de terceros. Es decir, a medida que el impacto sobre actores específicos —institucionales o sociales— se recrudece, también aumenta la gravedad del conflicto (véase la Figura 1).

Figura 1. *Expresión de la gravedad de la movilización social violenta en el marco de la política contenciosa*



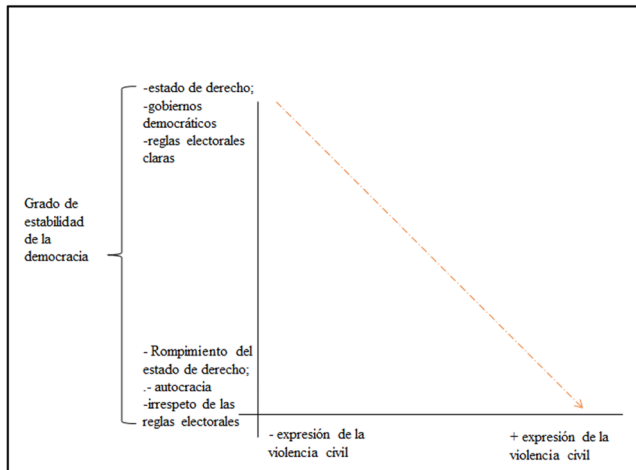
Fuente. Elaboración propia.

¹ Traducción propia.

Esta correlación debe interpretarse a la luz de lo planteado por Tilly (2017), quien sostiene que la debilidad del Estado favorece la proliferación de la violencia interpersonal entre la población. En cambio, cuando el gobierno ejerce una autoridad fuerte y legítima, dicha violencia tiende a disminuir significativamente.

Por otra parte, según Walter (2022), la fragilidad inherente a las democracias —caracterizada por la debilidad del Estado de derecho, la existencia de gobiernos autocráticos o la inobservancia de las reglas electorales, entre otros factores— también aumenta el riesgo de que se desaten ciclos de violencia civil (véase la Figura 2).

Figura 2. *Relación entre la democracia y la violencia*



Fuente. Elaboración propia.

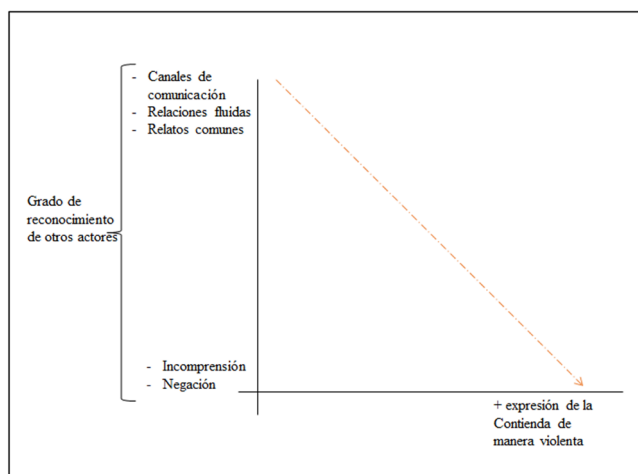
Como marco para analizar hechos contenciosos, el esquema propuesto identifica las transacciones entre los agentes gubernamentales (fuertes o débiles) y otros actores políticos involucrados, ya sea que actúen dentro de las estructuras institucionales o desde fuera, en calidad de opositores. Por lo tanto, el modelo debe considerar las disputas en torno a la política pública, entendida en un sentido amplio, dado que estas constituyen el núcleo de las pretensiones de cualquier política contenciosa.

En el marco de la política contenciosa, la clasificación de los actores involucrados constituye un elemento central para la definición y comprensión de la violencia. Siguiendo el enfoque de Tilly, estos actores pueden agruparse en distintas categorías: agentes gubernamentales, actores políticos tradicionales, fuerzas opositoras, ciudadanos no movilizados y otros actores externos.

Según Tilly (2017), el gobierno posee la facultad de reconocer y legitimar —o, en su defecto, deslegitimar— la participación de determinados actores en la contienda política. Sin embargo, en el marco de dicha contienda, el reconocimiento no opera de forma unidireccional, sino que construye entre los actores en conflicto. En este sentido, mientras mayor sea el grado de reconocimiento mutuo, menor será la probabilidad de que se desencadenen ciclos de violencia (véase la Figura 3).

En la medida en que predominan la negación o la incomprensión del otro, se afianzan las fronteras simbólicas que separan a un “nosotros” de un “ellos”. Esta dinámica dificulta la construcción de narrativas compartidas, restringe los canales de comunicación y debilita la posibilidad de establecer vínculos entre los distintos actores. Como resultado, aumenta la probabilidad de que se produzcan episodios de violencia.

Figura 3. *Relación entre el reconocimiento y la violencia*



Fuente. Elaboración propia.

Ahora bien, según Tilly (2017), en los episodios contenciosos, ciertos individuos —denominados emprendedores políticos— pueden ejercer una influencia significativa, ya sea sobre los colectivos movilizados o sobre el Estado, incidiendo directamente en las formas que adopta la violencia colectiva. Estos actores pueden influir en su intensidad, distribución territorial y modalidades de expresión. Su relevancia radica en que participan activamente en la coordinación de las acciones de movilización y, en ese sentido, pueden ampliar o restringir los márgenes de

reconocimiento, así como facilitar conexiones entre distintos grupos y redes involucradas en la contienda (véase la Figura 4).

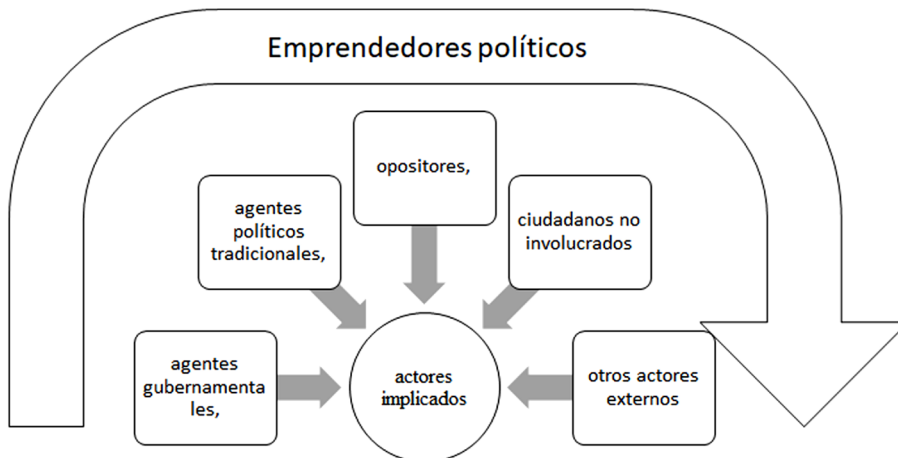
Sin embargo, el ejercicio de la violencia no se reduce exclusivamente a los factores vinculados al reconocimiento o la negación. En el marco de las movilizaciones, pueden surgir experiencias violentas que obedecen a la intervención de múltiples participantes, cuyas motivaciones y modos de actuar no siempre se ajustan a lógicas de legitimación recíproca (Tilly, 2017). En este sentido, es necesario considerar la presencia de *especialistas de la violencia*, tanto dentro como fuera del aparato estatal.

Según Tilly (2017),

la violencia colectiva aumenta en la medida en que las organizaciones especializadas en el despliegue de medios coercitivos (ejércitos, fuerzas policiales, bandolerismo coordinado, confederaciones de piratas, empresas mercenarias, estafas de protección y similares) aumentan en tamaño, alcance geográfico, recursos y coherencia². (p. 284)

Evidentemente, algunas de estas organizaciones se encuentran implicadas en las movilizaciones sociales violentas.

Figura 4. *Emprendedores políticos*



Fuente. Tomado de Tilly (2017).

² Traducción propia.

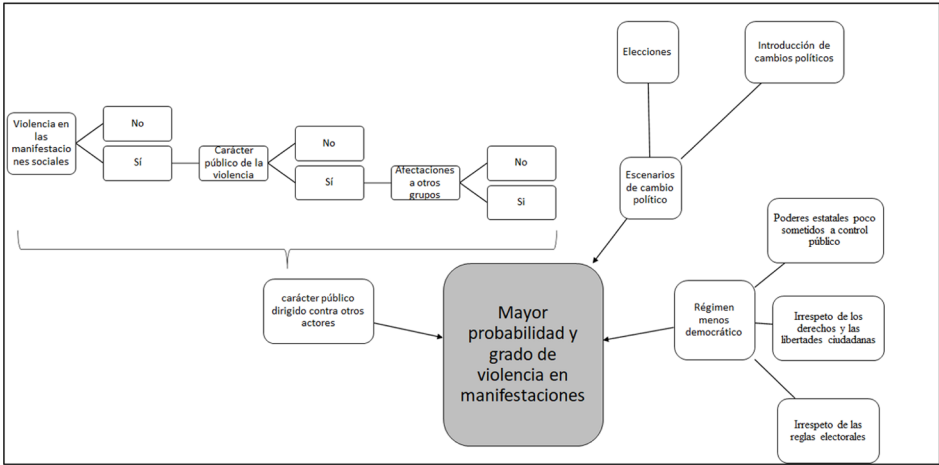
A partir de los elementos identificados en los análisis empíricos, puede afirmarse que la violencia no solo surge cuando las organizaciones se expanden territorialmente, sino también cuando empiezan a interferir entre sí. Esto ocurre, por ejemplo, cuando comparten un mismo espacio físico y se producen encuentros no deseados, o cuando sus agendas se superponen en torno a los temas en disputa. Como advierte Lichbach (2010), las interacciones locales entre actores especializados en el uso de la violencia también son una de las causas —a menudo, involuntarias— de los ciclos violentos, ya sea en contextos revolucionarios como contrarrevolucionarios.

Siguiendo las ideas de Demetriou (2012), puede sostenerse que los procesos de violencia en las movilizaciones sociales recientes pueden descomponerse en una serie de mecanismos de acción que se activan en momentos y espacios específicos. Esta perspectiva es fundamental para analizar el funcionamiento de las redes de acción entre los distintos actores involucrados.

Por ejemplo, se han identificado redes de acción directas —de alcance local y regional— e indirectas —que operan principalmente a través de plataformas digitales—. Ambos tipos de redes adquieren una relevancia analítica significativa para el estudio de la escalada de la violencia, especialmente en aquellos casos en los que se registran sincronías temporales y convergencias en las trayectorias de acción desplegadas de manera simultánea en los espacios virtuales y físicos.

Así, la conformación de redes simultáneas que operan en un mismo espacio —ya sea virtual o físico— favorece la escalada de la violencia. Estas redes tienden a incentivar la participación en actos violentos y a elevar el riesgo de que se produzcan ataques de mayor intensidad. En términos generales, la Figura 5 sintetiza los ejes centrales para comprender los factores que desencadenan la violencia y explican el aumento de su gravedad en el marco de las manifestaciones sociales contemporáneas.

Figura 5. Marco analítico: factores que desencadenan la violencia y aumentan su gravedad en las movilizaciones sociales violentas



Fuente. Elaboración propia.

Conclusiones

Tradicionalmente, los hechos violentos han sido analizados desde una perspectiva microsociológica de corte individual, orientada a rastrear el entramado de vínculos entre actores independientes (McAdam, 1986; Walgrave et al., 2021). Asimismo, los estudios sobre protestas se han desarrollado desde una perspectiva interdisciplinaria que combina elementos de la sociología y la psicología, centrándose en la identificación de los motivos de la contienda: agravios entre actores, identidades en pugna y emociones en juego (Stekelenburg y Klandermans, 2013; Duncan, 2018). No obstante, el análisis aquí propuesto sostiene que, si bien estos factores son relevantes, concentrarse exclusivamente en ellos conlleva el riesgo de invisibilizar otros elementos estructurales y dinámicas transversales que subyacen a distintos tipos de manifestaciones violentas, incluso cuando estas exhiben características muy diversas.

Esta perspectiva, en cambio, privilegia una lectura comparativa del contexto general (Quaranta, 2015; Vráblíková, 2014). El objetivo es dilucidar el rol de las instituciones, el panorama económico y político, así como las estructuras sociales

más amplias en el desencadenamiento y la intensificación de las movilizaciones sociales violentas.

A partir de esta lectura comparativa, elaboraron diagramas que permitieron una interpretación analítica del fenómeno, cuyo resultado fue el modelo propuesto. Estos diagramas son herramientas valiosas para identificar las conexiones entre la noción de movilización social violenta y su aplicación empírica en distintos contextos. Asimismo, facilitan el desarrollo de análisis más precisos y focalizados en los aspectos clave que estructuran este tipo de manifestaciones.

La aplicación de este modelo no implica, sin embargo, desconocer el carácter ambiguo de la violencia en el ámbito político. Esta ambigüedad se manifiesta, por ejemplo, en: i) la constante disputa en torno a la noción de fuerza legítima en distintos sistemas políticos (como se ha ilustrado parcialmente en este artículo); ii) la existencia de un continuo entre las acciones permitidas, la negligencia y el daño ejercido por agentes gubernamentales; y c) la participación activa o pasiva de estos agentes en interacciones que implican daño intencionado (Tilly, 2022b).

En este sentido, el marco analítico desarrollado no pretende ofrecer una visión unívoca. Por el contrario, busca resaltar la necesidad de considerar factores decisivos —estratégicos, desencadenantes, de agencia e interacción— que permiten comprender la conflictividad inherente al hecho político.

Referencias

- Álvarez, K., Gallego, P., Gándara, F., y Rivas, O. (2011) *Nosotros, los indignados. Las voces comprometidas del # 15-M*. Ediciones Destino.
- Andrain, C., & Apter, D. (1995). *Political Protest and Social Change*. New York University Press.
- Antentas, J. M., y Vivas, E. (2009). *Resistencias globales: de Seattle a la crisis de Wall Street*. Popular.
- Auyero, J. (2007). Making Sense of Collective Violence. In S. Tarrow & D. McAdam (Eds.). *Routine Politics and Violence in Argentina: The Gray Zone of State Power* (pp. 131-150). Cambridge University Press.
- Bailo, F., & Vromen, A. (2017). Hybrid Social and News Media Protest Events: From #MarchinMarch to #BusttheBudget in Australia. *Information, Communication & Society*, 20(11), 1660-1679. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1252410>
- Biscontini, T. (2021). *Proud boys*. Salem Press Encyclopedia.
- Blumenkranz, C., Gessen, K., Greif, M., Leonard, S., Resnick, S., Saval, N., Schmitt, E., & Taylor, A. (Eds.). (2011). *Occupy: Scenes from Occupied America*. Verso.
- Della Porta, D. (2015). *Social Movements in Times of Austerity: Bringing Capitalism Back into Protest Analysis*. Polity Press.
- Demetriou, C. (2012). Processual Comparative Sociology: Building on the Approach of Charles Tilly. *Sociological Theory*, 30(1), 51-65.
- Duignan, B. (January 6th, 2022). *United States Capitol Attack of 2021*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/January-6-U-S-Capitol-attack>
- Duncan, L. E. (2018). The Psychology of Collective Action. En K. Deaux & M. Snyder (Eds.). *The Oxford Handbook of Personality and Social Psychology* (pp. 885-907). Oxford University Press.
- Garzón, J. C., y Sánchez, A. (7 de junio de 2021). Cali: la protesta y las varias violencias. *razónpublica*. <https://bit.ly/3MKzA2L>
- Giner, S. (2001). Teoría del conflicto. En S. Giner, E. Lamo & C. Torres. (Eds.). *Diccionario de sociología*. Alianza.
- Giugni, M., & Grasso, M. (2019). *Street Citizens: Protest Politics and Social Movement Activism in the Age of Globalization*. Cambridge University Press.
- Goldstone, J., & Tilly, C. (2001). Threat (and Opportunity): Popular Action and State Response in the Dynamic of Contentious Action. En R. Aminzade, J. Goldstone & D. McAdam. (Eds.). *Silence and Voice in the Study of Contentious Politics* (pp. 179-194). Cambridge University Press.
- Herkenrath, M., & Knoll, A. (2011). Protest Events in International Press Coverage: An Empirical Critique of Cross-National Conflict Databases. *International Journal of Comparative Sociology*, 52(3), 163-180. <https://doi.org/10.1177/0020715211405417>
- Hessel, S. (2010). *¡Indignaos!* Ediciones Destino.

- Jackman, M. (2002). Violence in Social Life. *Annual Review of Sociology*, 28(1), 387-415. <https://www.jstor.org/stable/3069247>
- Jackson, R. (2012) *Occupy World Street: A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform*. Green Publishing.
- Kishi, R. (April 1st, 2021). *A Year of Covid-19: The Pandemic's Impact on Global Conflict and Demonstration Trends*. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). <https://acleddata.com/2021/04/01/a-year-of-covid-19-the-pandemics-impact-on-global-conflict-and-demonstration-trends/>
- Kishi, R., & Jones, S. (September 3rd, 2020a). *Demonstrations and Political Violence in America*. Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED]. <https://acleddata.com/2020/09/03/demonstrations-political-violence-in-america-new-data-for-summer-2020/>
- Kostelka, F., & Rovny, J. (2019). It's Not the Left: Ideology and Protest Participation in Old and New Democracies. *Comparative Political Studies*, 52(11), 1677-1712. <https://doi.org/10.1177/0010414019830717>
- Lance, B., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Lee, F. L. (2014). Triggering the Protest Paradigm: Examining Factors Affecting News Coverage of Protests. *International Journal of Communication*, 8, 2725-2746. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2873>
- Leitner, H., Sheppard, E., & Sziarto, K. (2008). The Spatialities of Contentious Politics. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 33(2), 157-172. <https://www.jstor.org/stable/30133354>
- Lichbach, M. (2010). Charles Tilly's Problem Situations: From Class and Revolution to Mechanisms and Contentious Politics. *Perspectives on Politics*, 8(2), 543-549. <https://doi.org/10.1017/S1537592710001246>
- McAdam, D. (1986). Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer. *American Journal of Sociology*, 92(1), 64-90. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/228463>
- Miranda, B. (7 de noviembre de 2019). Protestas en Bolivia tras la cuestionada victoria de Evo Morales: cómo se radicalizaron las manifestaciones y la violencia en el país. BBC Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50333889>
- Miranda, G., Herrera, A., Gonzalez, A., Mosquera J. E., Castro, B., Franciotti, J., Pellegrini, S., Zenevick, L., Arocha, M. F., Salazar, S., Aalborg, I., Kishi, R., Pavlik, M., Pfadt, F. (March 12th, 2020b). *Disorder in Latin America: 10 Crises in 2019*. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). <https://acleddata.com/2020/03/12/disorder-in-latin-america-10-crises-in-2019/>
- Molina, P. (1 de noviembre de 2019). *Protestas en Chile: el origen de la violencia subterránea que emergió en las manifestaciones*. BBC Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50262438>

- Montgomery, P. (2011). *Occupy: An Action Plan for Those Who Wait in Faith*. Godzchild Incorporated.
- Orum, A. (1974). On Participation in Political Protest Movements. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 10(2), 181-207. <https://doi.org/10.1177/002188637401000206>
- Palacios-Valladares, I. (2020). Chile's 2019 October Protests and the Student Movement: Eventful Mobilization? *Revista de Ciencia Política*, 40(2), 215-234. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2020005000106>
- Quaranta, M. (2015). *Political Protest in Western Europe: Exploring the Role of Context in Political Action*. Springer.
- Rahtz, H. (2016). *Race, Riots, and the Police*. Lynne Rienner.
- Roitman, M. (2012). *Los indignados. El rescate de la política*. Akal.
- Shepherd, K., & Bailey, H. (August 16th, 2020). Violent Clashes Erupt Between Far-Right Groups and Racial Justice Protesters in Portland and Other Cities. *The Seattle Times*. [eattletimes.com/nation-world/violent-clashes-erupt-between-far-right-groups-and-racial-justice-protesters-in-portland-and-other-cities/](https://www.seattletimes.com/nation-world/violent-clashes-erupt-between-far-right-groups-and-racial-justice-protesters-in-portland-and-other-cities/)
- Smedley, A. (June 6th, 2022). *Black Lives Matter*. Encyclopaedia Britannica. Recuperado el 30 de noviembre de 2022. <https://www.britannica.com/topic/Black-Lives-Matter>
- Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). The Social Psychology of Protest. *Current Sociology*, 61(5-6), 886-905. <https://doi.org/10.1177/0011392113479314>
- Tilly, C. (2010). *Los movimientos sociales 1768-2008: desde sus orígenes hasta Facebook*. Crítica.
- Tilly, C. (2017). The Politics of Collective Violence. In E. Castañeda & C. Schneider. (Eds.). *Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change: A Charles Tilly Reader*. Routledge.
- Tilly, C. (2022a). Conversaciones contenciosas. En E. Castañeda & C. Schneider. (Eds.). *Charles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social: antología selecta*. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.
- Touraine, A. (2006). Los movimientos sociales. *Revista Colombiana de Sociología*, 27, 255-278. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/7982>
- Vráblíková, K. (2014). How Context Matters? Mobilization, Political Opportunity Structures, and Nonelectoral Political Participation in Old and New Democracies. *Comparative Political Studies*, 47(2), 203-229. <https://doi.org/10.1177/0010414013488538>
- Walgrave, S., Wouters, R., & Ketelaars, P. (2021). Mobilizing Usual Versus Unusual Protesters: Information Channel Openness and Persuasion Tie Strength in 71 Demonstrations in Nine Countries. *The Sociological Quarterly*.
- Walter, B. (2022). *How Civil Wars Start*. Crown.
- Weiner, R. (December 22nd, 2021). Proud Boy Pleads Guilty to Felony Charge in Capitol Riot. *The Washington Post*. <https://wapo.st/3OMQWi8>